



**Acta de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del año 2024 del
Comité de Transparencia de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.**

ACTA FECC-CT-SE-25/2024.

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00** horas del día **11 de noviembre de 2024**, en la sala de juntas del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ubicada en Amado Aguirre #857, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara Jalisco, se reúnen el **Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar**, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia de este sujeto obligado; la **Mtra. Margarita Ramírez Esparza**, Coordinadora de Unidad de Transparencia e Información, en su carácter de Secretario Técnico; y la **Mtra. Norma Araceli Espinosa Limón**, Directora de Planeación, Administración y Finanzas, integrante del Comité de Transparencia; a efecto de celebrar la presente sesión extraordinaria, con fundamento con lo establecido en los artículos 6 apartado A y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 9, 15 y 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 5, 18, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Registro de asistencia.

Para dar inicio con el desahogo del orden del día, se verifica la presencia de los integrantes del Comité de Transparencia y se declara el **quorum legal** para llevar acabo la presente sesión, de conformidad con lo establecido por el artículo artículo 28 punto 1 fracciones I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Toda vez que se cumple con el requisito establecido en el artículo 29, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se declara formalmente constituido el Comité de Transparencia y se tienen por válidos los acuerdos que se tomen, dando inicio bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Análisis sobre la clasificación de información reservada, señalada en el expediente **FECC-SIP-276-2024**.
4. Acuerdos.
5. Cierre de sesión y firma del acta.

Se pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación, misma que se **APRUEBA POR UNANIMIDAD**.



Acto seguido, para desahogar el punto 3 del orden del día, el Presidente del Comité de Transparencia pone a consideración del resto de los integrantes:

**I. ACUERDO FECC/CT/38/2024.
ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA POR EL CUAL SE
CONFIRMA, REVOCA O MODIFICA EL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN RESERVADA.**

Mismos que fueron circulados por la Mtra. Margarita Ramírez Esparza, Coordinadora de la Unidad de Transparencia e Información, para su conocimiento y observaciones en caso de que existieran.

Expuesto lo anterior, sin observaciones que realizar al respecto, se somete a votación y se asienta el sentido de esta:

Mtra. Margarita Ramírez Esparza.

Coordinadora de la Unidad de Transparencia e Información.
Secretario Técnico del Comité.

A FAVOR

Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Presidente del Comité Transparencia.

A FAVOR

Mtra. Norma Araceli Espinosa Limón.

Directora de Planeación, Administración y Finanzas.
Integrante del Comité Transparencia.

A FAVOR

Una vez asentada la votación correspondiente se determinan los siguientes puntos:

Primero. Se aprueba por unanimidad el contenido de la presente acta, considerando que este Comité sesiona con fundamento en el Título Tercero, Capítulo II, artículos 27, 28, 29 y 30 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; en correlación con el numeral 6, de su Reglamento.

Segundo. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que dé seguimiento a los acuerdos aprobados en la presente sesión.

Tercero. Publíquese la presente acta en el portal de transparencia de esta Fiscalía Especializada a efectos de dar publicidad al acto, de conformidad con el artículo 8, punto 1, fracción I, inciso g), de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.



Desahogando el último punto del orden del día, el Presidente del Comité de Transparencia declara **CLAUSURADA** la **Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria**, a las **13:35** horas del día **11 de noviembre de 2024**, firmando de conformidad los que en ella participaron.

Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Presidente del Comité Transparencia.

Mtra. Margarita Ramírez Esparza.
Coordinadora de la Unidad de Transparencia e Información.
Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

Mtra. Norma Araceli Espinosa Limón.
Directora de Planeación, Administración y Finanzas.
Integrante del Comité de Transparencia.





ACUERDO FECC/CT/38/2024.
Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria.
11 de noviembre de 2024.

**ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA POR EL CUAL SE CONFIRMA,
REVOCA O MODIFICA EL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
RESERVADA.**

El objeto del presente instrumento es el de analizar y determinar el tipo de información pública que le es aplicable a la solicitud de acceso a la información pública que a continuación se describe:

Expediente: **FECC-SIP-276-2024.**

Folio: **142105724000240.**

Fecha de recepción oficial: **04 de noviembre de 2024.**

Información solicitada: **Copia simple del expediente relativo a la carpeta de investigación 247/2022**

CONSIDERANDO

I. Que el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como al de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Del mismo modo, dispone como principio que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

II. Que el artículo 4, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que el derecho a la información pública y la protección de datos personales será garantizado por el Estado, en los términos de lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las leyes especiales en la materia.

Del mismo modo, el numeral 15, fracción IX, del mismo ordenamiento legal, establece que las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la transparencia y el derecho a la información pública, en el ámbito de su competencia.

III. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios es reglamentaria de los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo tercero; y, 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; tiene por objeto garantizar y hacer



efectivo el derecho de toda persona a solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública de conformidad con lo establecido en dicha ley, así como clasificar la información pública en poder de los sujetos obligados.

IV. Que el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, Estados y Municipios, que comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Dicho numeral dispone que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.

V. Que el artículo 53, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que la investigación de los delitos del fuero común y concurrentes, así como el ejercicio de la acción penal que compete al Ministerio Público ante los tribunales se realizará a través de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la ley.

VI. Que el artículo 8, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. De igual manera, que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio de aquellos casos en que los particulares pueden ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

VII. Que el artículo 8, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Jalisco señala que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución de estos para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicha Constitución señalan.

VIII. Que el numeral 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el proceso penal será acusatorio y oral; y que este se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Del mismo modo, en la fracción I, del apartado A, del mismo numeral, establece como principio general que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.



En la misma vertiente, la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio general, que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. En el mismo sentido, que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

IX. Que las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, de conformidad con lo establecido en el artículo 1. En el mismo orden, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2, tienen por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

X. Que el artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tutela la reserva de los actos de investigación, al consagrar que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho Código y demás disposiciones aplicables.

XI. Que mediante decreto número 26499/LXI/17 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 31 de octubre de 2017, se reformó el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por medio del cual se creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

XII. Que mediante decreto número 27214/LXII/18 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 05 de diciembre de 2018, se abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

XIII. Que el artículo 11, de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, señala que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la responsable de investigar y perseguir las conductas que el Código Penal del Estado tipifica como "delitos relacionados con hecho de corrupción" previstos en los artículos 144, 145, 146 fracciones I, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIX, XXI, XXII, XXIII y XXIV, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y demás ordenamientos especiales. Funciona con autonomía técnica, operativa y presupuestal; por tanto, no existe jerarquía ni preeminencia con la Fiscalía Estatal.

XIV. Que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es sujeto obligado, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 punto 1 fracción XXI de la Ley



de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y fue determinado como tal en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2019, aprobada por los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

XV.- Que con fecha 28 de febrero del año 2019 se constituyó el Comité de Transparencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para el cumplimiento de las obligaciones que en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales le devienen, como sujeto obligado directo; el cual fue reestructurado el día 17 de marzo de 2021. Actualmente, se tiene formalmente reconocido ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme con la notificación efectuada a este sujeto obligado el día 08 de junio de 2022, con motivo del cumplimiento al mecanismo de actualización del Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco, de acuerdo con lo requerido mediante acuerdo AGP-ITEI/022/2022, aprobado por el Pleno de ese organismo público.

ANÁLISIS

Este Comité de Transparencia tiene a la vista las constancias que integran el expediente descrito con antelación, de las cuales se desprende el oficio **FECC/DCPA/1660/2024**, de fecha 06 de noviembre de 2024, firmado por el Director de Control de Procesos y Audiencias de las Agencias del Ministerio Público, en el cual se pronunció sobre la existencia del expediente pretendido y el estado procesal que guarda al día de la tramitación de su solicitud; la cual se encuentra en etapa de Investigación, en fase inicial.

En este sentido, solicitó la intervención de este órgano colegiado para efecto de que determine lo que en derecho corresponda, en torno a la procedencia o improcedencia para que la información pretendida sea proporcionada al solicitante; debido a que estimó que nos encontramos frente a una solicitud que conlleva la difusión de información reservada.

Como consecuencia, del estudio y análisis llevado a cabo a dichas constancias, este Comité de Transparencia tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN

Tomando en consideración la naturaleza de la información pretendida, las obligaciones que le devienen a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en materia de seguridad pública, propiamente en la investigación y persecución del delito, así como las atribuciones que ejerce en materia de acceso a la información pública y protección de los datos personales, este órgano colegiado determina que no es procedente reproducir la Carpeta de Investigación pretendida; en razón de lo siguiente:



Por un lado, por considerar que nos encontramos frente a información que es susceptible de ser **protegida temporalmente**, con el carácter de reservada, en términos de lo establecido en el artículo 17, punto 1, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; en correlación con el numeral 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que está **en proceso**.

Si bien, el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que toda información en posesión de un sujeto obligado es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes; su artículo 21 refiere que la **seguridad pública** es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; la cual comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de ley y en las respectivas competencias que la Constitución señala.

Al respecto, el artículo 213, del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que **la investigación** tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

En este sentido, el numeral 217, del mismo ordenamiento legal, establece que el Ministerio Público y la Policía deben dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta; al mismo tiempo, establece el deber de **garantizar el acceso a la misma por parte de los sujetos que, de acuerdo con la ley, tuvieren derecho a exigirlo.**

Consecutivamente, el numeral 218, dispone que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho Código.

De tal manera, de la interpretación sistemática a dichos preceptos legales, se sustenta el criterio de este Comité de Transparencia, para considerar que, **temporalmente**, no es procedente suministrar copia del expediente señalado, dado que hacerlo atenta contra el interés público; esto es, en perjuicio del imperioso sigilo que debe revestir una investigación para garantizar el éxito de esta.

Como limitante al derecho de acceso a la información pública, interpretado por nuestro máximo tribunal de control constitucional, se encuentra la restricción al



ejercicio del derecho a ser informado cuando el objeto sea la protección o salvaguarda de derechos o bienes jurídicos tutelados a favor de terceros, que lejos de limitar el acceso a la información **lo garantiza**, puesto que el mismo también **entraña la protección** de los intereses nacionales, como lo es la seguridad pública y el respeto a la privacidad u otros derechos a favor de los gobernados.

Criterio expresado en la **Tesis P. LX/2000**, con número de registro 191967, visible en la página 74, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril del año 2000; sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: **DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS**; que señala lo siguiente:

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

(Lo subrayado es propio).

Desde esta perspectiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó en la **Tesis 2a. XLIII/2008**, con número de registro 169772, visible en la página 733, Tomo XXVII, correspondiente al mes de abril de 2008, que lleva por rubro: **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**, que el hecho de que las leyes secundarias restrinjan temporalmente el acceso a información pública no constituye una violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el ejercicio de este derecho no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan, entre otros, en la protección de la seguridad nacional, así como la protección a los intereses o derechos de terceros; de acuerdo con lo siguiente:



El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.

(Lo subrayado es propio).

Siguiendo el orden de ideas, en la **Tesis Jurisprudencial 1a./J.95/2022 (1 1a.)**, con número de registro 2025272, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el día 23 de septiembre de 2022; sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: **IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD**; se destacó la importancia que tiene el sigilo en la etapa de Investigación, al tenor de lo siguiente:

Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no



exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de total importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa.

(Lo subrayado es propio).

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia estima que proporcionar, reproducir o permitir el acceso a la información pretendida, produce concretamente los siguientes:

DAÑOS

DAÑO ESPECÍFICO: Se hace consistir, principalmente, en la inobservancia e incumplimiento de obligaciones a las que debe sujetarse esta institución en materia de seguridad pública, así como en la violación a principios y bases que debe aplicar en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, propiamente en la protección de información considerada como reservada.

De tal manera, proporcionar información relacionada con investigaciones no concluidas, tiene como consecuencia una franca violación a disposiciones de orden público, tendientes a proteger los registros de investigación que solo deben y pueden ser conocidos por alguna de las partes legitimadas en el procedimiento de que se trate, sí como de aquellas personas o autoridades que, de manera fundada y justificada lo requieran. Esto es, por la vía idónea y en el momento procesal oportuno.

DAÑO PRESENTE: El Código Nacional de Procedimientos Penales vigente refiere que el acceso a los registros de investigación debe ser garantizado para quienes tienen el derecho a exigirlo. En este sentido, considerando que tercera persona solicita copia de una investigación no concluida, este Comité de Transparencia estima que el daño que produce su consulta tiene como efecto un fraude a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus



Municipios, puesto que el objeto de esta también implica la protección de dicha información.

De este modo, es dable señalar el acceso a la información inmersa en los registros de una investigación en proceso, atañe únicamente a quien tiene la calidad de parte o a quien demuestre un interés jurídico en conocerla, en los límites y con las excepciones que alude el Código Nacional de Procedimientos Penales.

DAÑO PROBABLE: Este se hace consistir en el posible aprovechamiento que se le pudiese dar a dichos registros de investigación, con el cual se lesionen derechos o intereses de terceros, al ser difundida con la intención de dañar la imagen o comprometer el derecho al honor de los denunciados/señalados como responsables; puesto que el acceso a la información pretendida permite su identificación.

Adicionalmente, produciría una ineludible responsabilidad en contra de esta autoridad frente al ejercicio de otros derechos que pueda emprender la parte afectada; ello al difundir información que debe permanecer en estricta reserva.

Sirva invocar el **Criterio de Interpretación 01/2024**, sustentado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, aprobado y difundido mediante acuerdo general número AGP-ITEI/035/2024, de fecha 23 de octubre de 2024; en el que se señala que es innecesaria la elaboración de una versión pública y/o informe específico, cuando la información solicitada se ciñe a información que cumple con los parámetros de reserva temporal, ya que no sería de utilidad para el solicitante presentar un documento íntegramente testado. Ello, de conformidad con lo siguiente:

Es innecesaria la entrega de una versión pública cuando la información requerida se ciñe a un dato reservado o confidencial.

La clasificación de información como reservada contemplada en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios conlleva a expedir una versión pública que suprima los datos reservados o confidenciales, con el fin de garantizar el principio de máxima publicidad; no obstante, cuando la información solicitada se ciñe a un dato en específico y este cumple con los parámetros para ser considerado como información reservada, resultaría innecesaria la elaboración de una versión pública y/o informe específico, toda vez que la información proporcionada no sería de utilidad al solicitante, en razón de que no contendría el único dato específico requerido.

Por lo anteriormente expuesto, analizado, fundado y motivado, se emiten los siguientes:

ACUERDOS




PRIMERO. Que es procedente confirmar el criterio de clasificación emitido por el Director de Control de Procesos y Audiencias de las Agencias del Ministerio Público, descrito en el presente acuerdo, para considerarla temporalmente como **reservada**.

SEGUNDO. Que el plazo por el cual deberá mantenerse en reserva es el máximo previsto en el numeral 19, punto 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante del presente acuerdo, así como sus alcances, dentro del término de ley correspondiente.

CUARTO. Que la presente acta deberá registrarse en el índice de información reservada, y publicarse en el Portal de Transparencia de este sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 8, punto 1, fracción I, inciso g), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Así lo acordó el Comité de Transparencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la **Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria**, celebrada el día **11 de noviembre de 2024**.


Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Presidente del Comité de Transparencia.


Mtra. Margarita Ramírez Esparza.
Coordinadora de la Unidad de Transparencia e Información.
Secretario Técnico del Comité de Transparencia.


Mtra. Norma Araceli Espinosa Limón.
Directora de Planeación, Administración y Finanzas.
Integrante del Comité de Transparencia.